

CONDICION VEINTIDOS  
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



## PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital . . . . . 10  
Un semestre id. id. . . . . 6  
Un trimestre id. id. . . . . 4  
Números sueltos. . . . . 0'25  
Se publica todos los días excepto los domingos, Viernes Santo, Ascensión, Natividad, Corpus Christi y San Roque.

BOLETIN OFICIAL  
DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la Gaceta. Artículo 1.º del Código civil.

## PARTE OFICIAL

## PRESIDENCIA

## DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, y la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

## GOBIERNO DE PROVINCIA

## ELECCIONES

Los artículos 25 y siguientes de la ley Electoral de 8 de Febrero de 1877 para Senadores, preceptúan que el día 1.º de Enero de todos los años, los Ayuntamientos formarán y publicarán listas de seis individuos y de un número cuádruplo de vecinos del mismo pueblo, con casa abierta, que sean los que paguen mayor cuota de contribuciones directas, sin acumularse lo que satisfagan en ningún otro; que estas listas han de permanecer expuestas al público hasta el día veinte del citado mes, resolviendo el Ayuntamiento las reclamaciones que sobre las mismas se hagan en dicho término, antes del primero de Febrero; que pueden apelar los que no estuvieren conformes con la resolución de los Ayuntamientos a la Comisión provincial, la que en los quince días siguientes resolverá lo que estime justo; y que contra estas resoluciones cabe aun el recurso de alzada ante la Audiencia territorial hasta el veinte de Febrero, la que fallará lo que proceda antes del primero de Marzo, publicando los Ayuntamientos

las listas definitivas con anterioridad al día ocho de este último mes.

Llamo muy especialmente la atención de los señores Alcaldes de esta provincia sobre los anteriores preceptos legales a fin de que en todos los Ayuntamientos sean exacta y puntualmente cumplidos, debiendo prevenirles que no obsta el que tengan que constituirse las nuevas Corporaciones el primero de Enero próximo para que dejen de ejecutar lo prevenido en el mencionado artículo 25 de la ley Electoral para Senadores, inmediatamente después de terminada la sesión inaugural, y sin que para ello sirva de excusa la aplicación de la Real orden de 2 de Julio de 1880, que en manera alguna puede alterar el cumplimiento de una ley que al señalar en el indicado día la referida operación, se refiere al caso en que la constitución de los Ayuntamientos se verifique el 1.º de Julio.

Orense 29 Diciembre de 1893

El Gobernador,  
ANTONIO LLAMAS NOVAC.

El Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial con fecha 25 del actual me comunica los siguientes acuerdos:

«Esta Comisión en sesión de ayer adoptó el siguiente acuerdo:

Resultando: que verificadas las elecciones municipales del término de Monterrey se produjo contra las mismas reclamación por don Manuel Nieto y consortes interesando se declaren nulas por los defectos de origen a partir desde las celebradas en 1887 que debieran tener lugar en números, de distritos en que no aparecía dividido aquel término municipal; en que no habían sido proclamados candi-

datos D. Manuel Nieto y D. Cipriano Fernandez; en que no se han puesto al público las listas, y en que el Alcalde ha presidido la segunda sección debiendo hacerlo de la 1.ª que lo fué por el primer Teniente;

Resultando: que si bien por la certificación expedida por el Ayuntamiento y que obra unida a los autos, aparece que durante los ocho primeros días siguientes al de la elección no se ha promovido reclamación alguna contra dicha elección, es lo cierto que en el tres de los corrientes aparece por certificado de Correos, que los interesados quisieron recurrir en tiempo y forma con lo cual estaba esta Comisión en el caso de dictar los apremios oportunos para estrechar a aquella a la remisión de antecedentes;

Considerando: que esta Comisión aun cuando pudiera conocer de los defectos de origen supuestos cuando por términos generales le incumbe la apreciación de los hechos y examen de las formas guardadas en el desarrollo de la elección, es lo cierto que yendo unida a los autos la certificación del Secretario comprensiva de la Real orden de 4 de Agosto de 1891, declarando la validez de las verificadas en aquel bienio, tal superior resolución se interpone entre la época actual y la a que aluden los recurrentes para deribar de ello el defecto de origen, no pudiendo por tanto esta Comisión juzgar del criterio legal que lo informa, y que siempre se supone;

Considerando: que yendo unidas al expediente las listas certificadas del Censo para determinar la ilegitimidad de los señores Nieto y Fernandez, hay que estar a la afirmación solemne que desconociendo aquella establece el Ayuntamiento y que lejos de estar contrarrestada

por prueba en contrario aparece en parte confirmada por los mismos recurrentes que no niegan cuanto sobre su capacidad se contiene en la aludida afirmación, siendo indiscutible que todo cargo pasivo presupone ilegitimidad;

Considerando: que el hecho de publicación de listas está demostrado por el mismo expediente electoral que tiene carácter de documento público y fehaciente para esta Comisión;

Considerando: que al establecerse por las disposiciones legales vigentes que se guarde el orden establecido para las presidencias, tal concepto que debe entenderse en el sentido de que no se anteponga un Concejal a los Tenientes ni éstos al Alcalde, de suerte que arbitrariamente pudieran ser privados de aquella prerrogativa, pero en modo alguno puede referirse aquel orden a los distritos ni a las secciones cuyas unidades son igualmente atendibles no existiendo prelación alguna para ellas máxime en el caso presente en el que el Alcalde presidió la sección del pueblo en que el Ayuntamiento tiene su casa Consistorial.

La Comisión acuerda desestimar las protestas producidas por Nieto y consortes, y en su virtud aprobar las operaciones electorales de Monterrey, declarando la legitimidad de la proclamación de Concejales hecha por la Junta de escrutinio de aquel término.

Comuníquese este acuerdo al Sr. Gobernador civil a los efectos dispuestos en el art. 6.º del Real decreto de 24 de Marzo de 1891.

Esta Comisión en sesión de ayer adoptó el siguiente acuerdo:

«Visto el expediente de la elección de Concejales últimamente celebradas en el Ayuntamiento de San Ciprian de Viñas y



Resultando: que celebrada dicha eleccion el dia 19 del próximo pasado mes de Noviembre en las dos secciones de San Ciprian y Santa Cruz que comprende el mencionado término fué protestada su validez por varios electores de aquel municipio fundándose en que en la segunda seccion precitaba se habia negado el derecho de sufragio á los vecinos de las parroquias de Rante y Santa Comba los cuales se hallan adscritos y votan en dicha seccion segun asi se consigna en las listas impresas y aprobadas del Censo, alegando á su vez la misa del Colegio, como razon de la negativa base de la reclamacion, que dichos electores aunque inscritos en el segundo distrito pertenecen al primero segun la division correspondiente que de los mismos tiene acordado de antemano el Ayuntamiento;

Resultando: que tal aserto se halla corroborado por el informe del Alcalde el cual confirma el hecho de que, en efecto, los electores de aquel término se hallan divididos en dos secciones, pero que dicha division se ajusta y refiere únicamente á los distritos electorales para la eleccion de diputados á Cortes y provinciales más de ninguna manera para la de Concejales puesto que el término se halla dividido para el caso en dos distritos: el de San Ciprian que comprende la parroquia de este nombre y las de Souto, Rante y Santa Comba, y el de Santa Cruz que además de la feligresia que le denomina abarca las de Noalla y Pazos, aclaracion que se hizo é hizo presente á raíz de la convocatoria para las elecciones pues al publicarse las listas impresas al final de ellas se manuscibió la advertencia que entrañaba tal rectificacion, concluyendo el informe opinando que en su consecuencia debia declararse nula la eleccion verificada en el primer distrito por que no votaron en él los electores que verdaderamente le corresponden, y válida la celebrada en el segundo por cuanto emitieron sus sufragios en dicho distrito los que legalmente en él pueden realizarlo;

Resultando: que por D. Manuel Soto Gomez se reclamó contra la capacidad del Concejal electo por el segundo distrito Victorino Villarino, mediante fué Juez municipal del término el anterior bienio que terminó en 31 de Julio próximo pasado;

Considerando: que se halla demostrado de manera indubitada por el informe del Alcalde de San Ciprian de Viñas y la certificacion expedida por el Secretario, la cual corre unida á los antecedentes, que dicho término municipal se halla dividido por la eleccion de Concejales en dos distritos, al primero de los cuales ó sea al de S. Ciprian pertenecen los electores de las parroquias de Rante y Santa Comba, los que no pudiendo ejercitar

su derecho el dia de la eleccion en la segunda seccion, que las listas electorales les asigna, abstuvieron igualmente de hacerlo en la primera seccion por virtud de tal deficiencia incompleto y falso el resultado de la votacion en este distrito y por consiguiente nula de hecho y de derecho la eleccion en él verificada;

Considerando: que cada distrito municipal tiene votacion propia de Concejales y en todos los colegios del respectivo distrito, se votará en términos de que para ninguna candidatura sean acumulables los votos de uno á otro distrito no pudiendo ningun elector emitir su sufragio en otra seccion que aquella á que corresponda, preceptos que quedarían incumplidos si prevaleciera la ambigua formacion del Censo del Ayuntamiento de San Ciprian el cual hizo la division electoral privativa solamente para la eleccion de Diputados á Cortes y provinciales, siendo así que debió tomar por base para dicho objeto los distritos municipales, único modo de conseguir la unidad del Censo y su adaptacion á los tres órdenes de elecciones, prevision cuya práctica fué sanamente aconsejada por el Legislador en la Real orden de 25 de Noviembre de 1890;

Considerando: que á tenor de lo terminantemente dispuesto en el párrafo 4.º del art. 13 del Real decreto de adaptacion se considerarán nulas de toda nulidad las elecciones municipales en que no se abserven las disposiciones de los artículos que comprende el título 3.º las cuales definen y diferencian el número de distritos con que han de dividirse los Ayuntamientos y el de las secciones y Concejales que han de comprender y asignarse á cada uno de aquellos;

Considerando: que la invalidacion de las elecciones verificadas en la seccion de San Ciprian en nada afecta á la legalidad de las operaciones electorales realizadas en la de Santa Cruz, puesto que lógicamente discurriendo los motivos que determina la nulidad de las unas, truécense en potisimas razones que argumentan y defienden la validez de las otras, por cuanto estimada la anexion de los electores de Rante y Santa Comba al primer distrito, claro está que estos no deben ni pueden votar en el segundo, en donde por consiguiente se ha realizado la votacion con sujecion estricta á todos los procedimientos legales;

Considerando que respecto á la incapacidad aducida contra el Concejal electo Victorino Villarino debe hacerse la declaracion de ineficaz por cuanto pudiendo ser elegidos los Jueces municipales que ejercen jurisdiccion el dia de las elecciones segun asi lo declara la R. O. de 18 de Julio de 1888 mayor razon existe todavia á favor del que ha cesado en el desempeño

de dicho cargo judicial tiempo antes de su eleccion para Concejal;

La Comision acuerda por mayoría declarar válidas las elecciones celebradas en el distrito de Santa Cruz y nulas las verificadas en el de San Ciprian de Viñas, las cuales volverán á realizarse una vez hechas en debida forma las necesarias rectificaciones en el Censo; y no ha lugar á estimar la reclamacion producida contra la capacidad del Concejal electo Victorino Villarino por la razon expuesta en la última consideracion.

Esta Corporacion en sesion de ayer adoptó el siguiente acuerdo:

«Visto el expediente de la incapacidad aducida contra el Concejal electo D. Manuel Suarez Gonzalez del Ayuntamiento de Villamarin;

Resultando: que varios electores de dicho Ayuntamiento reclamaron contra la capacidad del mencionado Concejal electo D. Manuel Suarez Gonzalez por desempeñar el cargo de Juez municipal suplente de aquel término, reclamacion que fué estimada por la Corporacion municipal en sesion de 26 del próximo Noviembre mandando en su vista elevar el expediente á la Diputacion provincial para la resolucion que considerase justa;

Considerando: que las Comisiones provinciales no deben entender en materia de incompatibilidades y excusas sino cuando mediare apelacion de los acuerdos que en ellas dictan los Ayuntamientos como tribunales de 1.ª instancia; pues así lo dispone de manera preceptiva y prohibitiva la jurisprudencia reiterada y uniforme contenida en diversas soberanas disposiciones.

La Comision acuerda abstenerse de conocer en este asunto por no constar en él razon expresa que abone su deliberacion, y comuníquese este acuerdo con devolucion de los antecedentes al señor Gobernador civil á los efectos del art. 6.º del R. D. de 24 de Marzo de 1891.

Lo que se publica es este periódico en cumplimiento de los citados acuerdos y conforme á lo prevenido en el art. 6.º del Real decreto de 24 de Marzo de 1891, debiendo tenerse presente en cuanto á la ejecucion de los mismos, lo establecido en la Real orden de 19 de Noviembre de 1892, publicada en la Gaceta del 22 de dicho mes y año.

Orense 29 de Diciembre de 1893.

El Gobernador,

ANTONIO LLAMAS NOVAC.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO  
DE MINISTROS

#### REALES DECRETOS

En el recurso de queja promovido por D. Manuel Sanchez con motivo de haber dispuesto la Autoridad militar la suspension de la retencion de parte del sueldo del Teniente de Infanteria don Joaquin Florido, acordada por el Juez municipal del distrito del Hospicio en juicio verbal celebrado ante el mismo, del cual resulta:

Que ante el referido Juzgado, y en 16 de Septiembre de 1881, se celebró juicio verbal entre D. Manuel Sanchez, apoderado de D. Ramon Ruiz Carriedo y D. Mariano Pintor, apoderado de D. Joaquin Florido y Vernill sobre pago de 1.000 reales procedentes de un pagaré vencido, conviniendo en el juicio, entre otras cosas, en que reconociendo el mencionado D. Joaquin Florido la deuda y su procedencia, se obligaba á satisfacerla cediendo 140 reales mensuales de la parte legal del sueldo que disfrutaba como Teniente de Infanteria ó de otro mayor ó menor que en lo sucesivo pudiera disfrutar consistiendo en que se pasara oficio de retencion, para que tan pronto como terminaran otras dos, tuviera efecto la de que se trata y se reintegrara el demandante de la suma reclamada.

Que elevado á sentencia el referido convenio y llevado á efecto, la Direccion general de Infanteria acordó en 18 de Agosto de 1883 que suspendieran todo descuento de los haberes de don Joaquin Florido, á excepcion de los alimentos para su familia, por ser preferente esa retencion á las demás, debiendo consistir el descuento en la cuarta parte del sueldo que entonces disfrutaba aquel oficial, por no llegar á 2.000 pesetas, fundándose dicha disposicion en que, aparte de la retencion de que se ha hecho mérito, el Juzgado de primera instancia del distrito de la Magdalena de Sevilla, en autos seguidos á instancia de doña Trinidad Garcia Laguna contra su marido D. Joaquin Florido, habia dictado sentencia condenando al demandado á que entregase á su mujer la cantidad de 200 reales por mensualidades adelantadas para su alimentacion.

Que en 18 de Diciembre de 1884 compareció ante el Juez municipal del distrito del Hospicio D. Manuel Sanchez, suplicando que se pasara oficio al Director general de Infanteria á fin de que la retencion acordada en el juicio verbal de que se ha hecho mérito se llevara á debido efecto, sin perjuicio del derecho que al interesado ó á la mujer del mismo correspondiera para solicitar en forma legal la limitacion del embargo ó la preferencia en el cobro, si estimasen que, para ello, les asiste derecho;

Que el Juzgado dictó auto acordando que se dirigiera comunicacion al Director general de Infanteria, invitándole al cumplimiento de las providencias del Juzgado, con la preferencia determinada, por la época en que por consecuencia de la misma se empezara á hacer la retencion al Teniente D. Joaquin Florido, aunque limitada á la parte legal, instruyéndole asimismo de que si la familia del Oficial ó cualquier otro acreedor se considerase con derecho preferente, debiera hacerlo valer ante los Tribunales de justicia y con audiencia del acreedor, sin que de ninguna manera pudiera apreciarse ni resolverse eso por las Autoridades militares;

Que en virtud de lo solicitado por D. Manuel Sanchez, acordó el Juzgado hacer pasar el correspondiente oficio al Ministerio de la Guerra, participándole lo ocurrido á fin de que acordara lo que considerase oportuno con objeto de que fueran cumplidas las providencias judiciales;

Que remida por el Juzgado al Ministerio de la Guerra certificacion de la comunicacion y diligencias mediadas entre el Juzgado municipal del distrito del Hospicio y el Jefe del batallon de la reserva de Palma, con objeto de que se sirviera ordenar que el referido Jefe cumpliera lo dispuesto por el Juzgado, reteniendo la cuarta parte del sueldo que disfrutaba el Teniente D. Joaquin Florido, entregando dicha parte á don Manuel Sanchez hasta que se reintegrara de la retencion que se le mandó ha-



cer, y pasados los antecedentes al Consejo Supremo de Guerra y Marina, éste informó en sentido de que D. Joaquín Florido no podía sufrir retención alguna que excediera de la cuarta parte de su sueldo; y como tiene preferencia la pensión alimenticia que por decisión judicial ha de entregarse a su esposa, procedía que ordenara reducir el descuento que aquel sufría a la cuarta parte de su sueldo para alimentos a su mujer, suspendiéndose las demás retenciones que pudieran acordarse para pago de deudas particulares, a la manera que se hace cuando las cajas de los cuerpos alegan créditos contra los individuos del Ejército. Dicha acordada se fundaba en las Reales órdenes de 27 de Enero y 30 de Abril de 1883, y de conformidad con ella se dictó por el Ministerio de la Guerra una Real orden en 27 de Octubre de 1886.

Que D. Manuel Sánchez acudió al Juzgado municipal del distrito del Hospicio de esta Corte, promoviendo el recurso de queja contra la Autoridad administrativa militar y solicitando que se diera a dicho recurso la tramitación establecida en la legislación vigente en la materia.

Que tramitado dicho recurso, la Sala de gobierno de la Audiencia de esta Corte, de acuerdo con el dictamen fiscal, resolvió que debía elevarse al Gobierno el recurso de queja, fundándose en que a la jurisdicción ordinaria corresponde declarar el mejor derecho entre los acreedores de D. Joaquín Florido, no tan solo porque tiene la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales y hacer que se ejecute lo juzgado, sino porque la jurisdicción ordinaria es la única competente para conocer de los pleitos civiles y de todas las incidencias de los mismos, llevando a efecto sus resoluciones, y que al resolver esa cuestión de preferencia, las Autoridades militares han invadido la jurisdicción de los Tribunales ordinarios.

Que por el Ministerio de Gracia y Justicia se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros el expediente del recurso de queja de que se trata, y pedido informe por la Presidencia del Consejo al Ministerio de la Guerra, por éste se acordó remitir los documentos originales referentes al asunto, creyendo que no tenía necesidad de elevar informe, puesto que constaba ya el fundamento de la resolución de 27 de Octubre de 1886, siendo con estos antecedentes remitido el expediente al Consejo de Estado.

Que por Real decreto de 22 de Agosto de 1891 se declaró mal tramitado el recurso y que no había lugar a decidirlo, acudiendo en vista de esa declaración D. Manuel Sánchez al Juzgado solicitando que se incoase de nuevo el recurso, y habiendo el Juzgado accedido a esa pretensión, remitido el recurso a la Audiencia de esta Corte, acordó ésta, de conformidad con el dictamen fiscal, elevar al Gobierno las diligencias para la resolución que estimara procedente.

Que pedido informe al Ministerio de la Guerra, lo evacuó, manifestando que la Real orden dictada por dicho departamento y que ha dado lugar a la queja, se fundaba en los artículos 1.451 y 1.452 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la Real orden de 26 de Mayo de 1883, expedida por el Ministerio de Hacienda y circulada por el de la Guerra en 17 de Agosto del mismo año y en las de 27 de Enero y 30 de Abril de 1883 las cuales determinan que con relación a la cuantía del sueldo del interesado era necesario limitar a su cuarta parte el importe de los descuentos que judicialmente le habían sido hechos añadiendo que si en la Real orden se dispuso fuese preferido el descuento a

favor de la esposa de D. Joaquín Florido, se hizo teniendo en cuenta el carácter y naturaleza de cada una de ambas retenciones, siendo preferente la que tiene por objeto satisfacer una pensión alimenticia respondiendo al sustento de la familia del Oficial de que se trata. Concluyó su informe el Ministerio de la Guerra expresando que no había querido sostener en todo tiempo el mismo motivo de prioridad en los descuentos que sufre el Oficial de Ejército, puesto que posteriormente por Real orden circular de 14 de Mayo de 1890, dispuso dicho Ministerio que en casos análogos al de que se trata se sujetara la prioridad de los créditos a la resolución de los Tribunales de justicia, resultando de lo expuesto haberse llenado los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en la tramitación de los recursos de queja.

Visto el art. 76 de la Constitución, según el cual a los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado: Visto el art. 1.417 de la ley de Enjuiciamiento civil, que determina el orden que ha de guardarse en los embargos:

Visto el art. 1.451 de la misma ley, que establece la parte que puede ser embargada de los sueldos o pensiones según la cuantía de éstos:

Visto el Real decreto de 15 de Mayo de 1890, que resolvió el recurso de queja promovido por la Audiencia de esta Corte contra el Ministerio de la Guerra por haberse dictado por éste una Real orden disponiendo que solo se descontará la tercera parte del sueldo que disfrutaba D. Eusebio Luis Álvarez, y que cualquiera que fuese la providencia judicial dictada para señalar alimentos a la esposa de Álvarez no se le hiciera descuento que excediera de la suma proporcional a su sueldo:

Considerando:

1.º Que el presente recurso de queja se funda en que las Autoridades militares han dispuesto no llevar a efecto la retención del sueldo de Don Joaquín Florido acordada en la sentencia del Juzgado municipal del distrito del Hospicio de esta Corte.

2.º Que la negativa de dichas Autoridades al cumplimiento del fallo judicial tiene por base que D. Joaquín Florido sufre otra retención de parte de un sueldo en concepto de alimentos de su esposa e hijos, acordada en sentencia del Juzgado de primera instancia del distrito de la Magdalena de Sevilla.

3.º Que de lo expuesto se deduce que la cuestión de que se trata está reducida a saber cual de las dos retenciones es la preferente, y esta es función propia de los Tribunales ordinarios, a los que incumbe apreciar el carácter y la prelación de los dos conceptos por los que se ha acordado la retención del sueldo de D. Joaquín Florido.

4.º Que de la misma manera que está prohibido a las Autoridades administrativas provocar contiendas de competencia a las judiciales en los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por igual fundamento deben abstenerse las mismas Autoridades de dictar disposiciones que impidan la ejecución de la sentencia o de cualquier modo entorpezcan la acción de los Tribunales.

5.º Que el Ministerio de la Guerra viene a reconocer la doctrina que acaba de consignarse, puesto que al informar manifiesta, según se ha indicado, que por Real orden circular de 14 de Mayo de 1890, ha dispuesto que en casos análogos al presente se

sujete la prioridad de los créditos a la resolución de los Tribunales de justicia.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar haber lugar al recurso de queja promovido por don Manuel Sánchez, dejando sin efecto la Real orden de 27 de Octubre de 1886, dictada por el Ministerio de la Guerra.

Dado en Palacio a veintidos de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de León y el Juez de instrucción de La Vecilla, de los cuales resulta:

Que con fecha 6 de Junio de 1891, D. Juan Gutierrez, vecino de Ventosilla, y D. José Rodríguez, vecino de Millaró, en el Ayuntamiento de Rodiezno, dedujeron escrito de denuncia ante el Gobernador de la provincia de León, exponiendo: que según habían podido observar al examinar las cuentas municipales de dicho Ayuntamiento correspondientes a los años 1884-85 y 1885-86, había en las referidas cuentas dos libramientos que suponían cantidades gastadas en la reparación de caminos vecinales y obras públicas, el uno de ellos, de fecha 30 de Marzo de 1885, bajo el núm. 13, por valor de pesetas 800, y el otro, de 1.º de Junio de 1886, bajo el núm. 15, por pesetas 750, y en las nóminas de ellos adjuntas aparecían, en la primera, haber entregado a los que dicen 40 pesetas a cada uno, y en la segunda, 40 pesetas a José Rodríguez, y en las que se hayan estampadas las firmas de los exponentes, suponiendo que cobraron dichas cantidades en concepto de Presidentes de las Juntas administrativas los pueblos de Ventosilla y Millaró: que la primera de dichas nóminas era de fecha 25 de Marzo de 1885, y la segunda de 1.º de Junio de 1886; que esto les había causado grande sorpresa pues los dicentes ni presidieron las respectivas Juntas en los años de referencia, ni cobraron tales cantidades, ni las firmas eran suyas, sino que habían sido suplantadas por otra mano extraña; y como quiera que los cuantadantes hubieran supuesto tal pago para datarse de cantidades no pagadas y esto pudiera constituir un delito, en tal concepto, acudían al Gobierno de la provincia, donde a la sazón radicaban las cuentas susodichas, suplicando a la Autoridad gubernativa se dignase ordenar que los indicados documentos y la instancia que deducían fueran remitidos al Fiscal de la Audiencia para que se procediera a lo que hubiera lugar por la suplantación y falsedad cometidas:

Que pasada por el Gobernador la anterior denuncia a la Fiscalía de la Audiencia, ésta la remitió al Juzgado de instrucción de La Vecilla, el cual incoó el oportuno sumario, en el que practicadas cuantas diligencias se estimaron pertinentes y aportados asimismo a los autos los documentos y certificaciones que se creyeron necesarias para el esclarecimiento del hecho denunciado fué decretado el procesamiento de D. Andrés López Fernández y D. Alvaro Berrut Ramos, Alcalde y Secretario respectivamente del Ayuntamiento de Rodiezno durante los años 1884-85 y 1885-86.

Que dictado auto de terminación del sumario, y elevado que éste fué a la Superioridad, el Gobernador de la provincia, a quien uno de los procesados había acudido solicitando de su Autori-

dad requiriese de inhibición a la judicial, lo hizo así, de acuerdo con el informe de la Comisión provincial, alegando: que de la instancia formulada por el procesado D. Andrés López Fernández aparecía que se le estaba siguiendo procedimiento criminal por la gestión administrativa de los años 1884-85 y 1885-86, en que fué Presidente del Ayuntamiento de Rodiezno, procedimiento que tenía por objeto la aclaración de uno ó varios delitos que se suponían cometidos en la formación y rendición de cuentas municipales, las cuales, hasta la fecha, no habían sido censuradas ni aprobadas por la Superioridad; que en tanto que las cuentas de un Ayuntamiento no hayan sido examinadas por la Autoridad administrativa correspondiente, y ésta haya resuelto si deben ó no ser aprobadas definitivamente ó decidido si existen méritos para creer ó suponer, cuando menos, distracción de fondos, malversación de caudales u otro delito, los Tribunales ordinarios no pueden entender en el asunto, porque hasta ese momento no se sabe si hay ó no motivo para la formación de la oportuna causa; que a la Administración corresponde, al examinar las cuentas municipales del Ayuntamiento de Rodiezno, determinar si la Corporación ha invertido ó no legalmente las cantidades que el mismo haya recaudado y concepto por las cuales lo haya verificado, y la resolución que la Administración activa adopte sobre esto particular ha de influir en el fallo que en su día puedan dictar los Tribunales ordinarios; y por último, que, en su consecuencia, existía una cuestión previa por resolver, de la exclusiva competencia de la Administración. Citaba el Gobernador el artículo 165 de la ley Municipal y el 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente por la Audiencia de lo criminal de León, ésta sostuvo su jurisdicción, fundándose en que el hecho origen de la causa versaba acerca de las falsedades cometidas por el Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Rodiezno en las nóminas de las cantidades que se figuran entregadas a los Alcaldes de barrio del distrito para la conservación de caminos vecinales de servicio público, correspondientes a los años económicos de 1884-85 y 1885-86, suplantando las firmas de los funcionarios que se suponía recibieron las mencionadas cantidades, como también las de los Depositarios que figuraban en los libramientos, uno por valor de 800 pesetas y el otro por el de 750, y de cuyas cantidades se dio el Alcalde, como invertidas en el servicio expresado, en las cuentas municipales presentadas para su aprobación en el Gobierno civil de la provincia, y en tal concepto, era visto que dichos hechos podían constituir uno ó varios delitos de falsedad en documento oficial, cometidos por funcionario público, cuyo conocimiento era de la competencia de la Audiencia, sin que a la Administración estuviera reservada cuestión alguna previa de la cual dependiera el fallo que el Tribunal hubiese de dictar en su día; porque pudiendo constituir la suplantación de firmas y apropiamiento de las cantidades que se suponían en las cuentas municipales invertidas en servicios públicos del Municipio el delito de falsificación con lucro, como que la falsedad se ejecuta para algún fin determinado, de nada podía influir en tal calificación la resolución que la Administración adoptara sobre la aprobación ó censura de las cuentas municipales sometidas a su examen, una vez que, cualquiera que fuera aquella, podría existir siempre el delito de falsedad, cuya persecución y castigo incumbía a la jurisdicción ordinaria, y en que el examen de las cuentas minu-



ANUNCIOS OFICIALES

ADMINISTRACION DE HACIENDA  
DE LA PROVINCIA DE ORENSE

La representacion de la Compañia arrendataria de tabacos en esta provincia, comunica al señor Delegado de Hacienda con fecha 27 del presente mes lo siguiente:

Las espendedurias designadas para el canje de los efectos timbrados que caducan en 31 del corriente, en esta capital, son las de la calle de Colon, Progreso y Plaza; y en las subalternas las que se hallan establecidas en las cabezas de partido.

Lo que me apresuro á poner en conocimiento del público para los efectos indicados en el preinserto.

Orense 29 de Diciembre de 1893.  
—El Administrador, Urbano Gonzalez Rivera.

Para resolver acerca de una reclamacion entablada por doña Francisca Campos Rodriguez, vecina de la villa de Carballino, por haber sido indevidamente incluida con 118 pesetas de riqueza rústica y dos de urbana, en el repartimiento de la contribucion territorial del Ayuntamiento de Carballino, correspondiente al año económico de 1891 á 92, he acordado emplazar á D. Manuel Queimadelos, y D. José Salgueiro Peralva, Administrador é Interventor, respectivamente, de la suprimida subalterna de dicha villa, á fin de que dentro del improrrogable plazo de un mes, respondan de los cargos que en escrito fecha 31 de Diciembre de 1891 se deducen por la doña Francisca Campos, contra los indicados funcionarios por la inclusion citada.

Orense 29 de Diciembre de 1893.  
—El Administrador de Hacienda, Urbano Gonzalez Rivera.

AYUNTAMIENTOS

NOGUEIRA DE RAMUIN

Próxima la época en que ha de formarse el apéndice al amillaramiento para el año económico de 1894 á 95, se recuerda á los propietarios así vecinos como forasteros, la obligacion de presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento las relaciones juradas comprensivas de las fincas á que se contrae la alta y baja acompañadas de los documentos que acrediten el pago de derechos á la Hacienda las cuales serán admitidas hasta el treinta de Enero próximo.

Nogueira Diciembre 16 de 1893.  
—El primer Teniente Alcalde en funciones, Antonio del Campo.

LAZA

Desde el día de hoy hasta el 20 de Enero próximo, se hallará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento la lista de electores con derecho á elegir compromisarios para Senadores formada por esta Alcaldía conforme á lo dispuesto por la vigente ley electoral.

Lo que se hace público por medio del presente periódico oficial para conocimiento de todos los interesados y á los efectos del art. 26 de la mencionada ley.

Laza Diciembre 26 de 1893.—El Alcalde, Francisco Besteiro.

MERCA

Para dar el debido cumplimiento á lo ordenado en el art. 43 del Reglamento de 30 de Septiembre de 1885 que se contrae á la formacion del apéndice en el que han de figurar las variaciones ocurridas en el caudal tributario por ventas, sucesiones, permu-

tas y demás traslaciones de dominio, se recuerda á los propietarios así vecinos como forasteros, la obligacion que les impone el párrafo 4.º del art. 45 del citado reglamento, presentando en la Secretaria de este Ayuntamiento las relaciones juradas comprensivas de las fincas á que se contrae el alta ó baja, acompañadas de los documentos que acrediten el pago de derechos á la Hacienda por la trasmision del dominio, las cuales serán admitidas hasta el 23 de Enero próximo con objeto de que puedan ser tenidas en cuenta al formarse el apéndice del año entrante de 1894 á 1895 debiendo ser presentadas dichas relaciones con instancia escrita en papel de peseta clase 12 sin cuyo requisito no serán admitidas.

Merca Diciembre 17 de 1893.—El Alcalde, José Ferreiro.

Cumplimentando lo prevenido en la ley municipal vigentes en este día se da principio á la rectificacion del empadronamiento de todos los habitantes de este término municipal; á cuyo efecto se facilitarán en la Secretaría de esta corporacion hojas de padron que devolverán cubiertas á la misma antes de 31 del corriente, en las que habrán de comprenderse las personas de ambos sexos que no se hallen inscritas, y tengan su residencia en el distrito; debiendo tambien incluirse las que se hallen accidentalmente ausentes, cualquiera que sea el motivo de la ausencia y punto donde se encuentren.

Merca Diciembre 18 de 1893.—El Alcalde, José Ferreiro.

TABOADELA

Los contribuyentes de este término, por territorial así vecinos como forasteros, que hayan sufrido alteracion en sus capitales presentarán sus solicitudes debidamente justificadas en la Secretaria del Ayuntamiento en todo el mes de Enero próximo, pasado el cual se procederá á la confeccion del apéndice al amillaramiento para el año económico de 1894 á 95.

Taboadela 26 de Diciembre de 1893.  
—El Alcalde, José Paredes.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

Don Pedro Prendes y Suarez Quirós, Juez de primera instancia de Allariz, de elabroza, 20 de Diciembre de 1893.

Hago saber que en autos de jurisdiccion voluntaria, promovidos por el Procurador don Antonio Sanchez, en nombre de Ricardo Perez Cid, vecino de Junquera de Ambia, sobre prorrateo del foral denominado «Villarino sobre el rio» de ciento sesenta y cinco ferrados de centeno y ciento seis reales de derechos de renta anual, que debe percibir doña Carmen Perez, de dicho Junquera, se acordó por providencia de esta fecha, citar por medio de edictos á los interesados desconocidos, para que dentro del término de cuarenta dias, ó sea el día cuatro del próximo Febrero, comparezcan en la audiencia de este Juzgado, á las diez de su mañana, á manifestar si están ó no conformes con que se verifique el prorrateo solicitado, así como que este se lleve á cabo por el Perito don Camilo Rodriguez Taboada, de esta villa, que nombra por su parte el autor, bajo apercibimiento de que se les tendrá por conformes si no compareciesen por sí ó por medio de apoderado.

Y para la citacion de los interesados desconocidos en dicho prorrateo, para que comparezcan en el día y hora señalados á hacer la manifestacion referida por sí ó por medio de apoderado, bajo la prevencion de que queda

hecho mérito, se libra el presente en Allariz á veintiseis de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.—Pedro Prendes.—De orden de su señoría, César Alvarez.

ANUNCIOS

CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA

GRAN ESTABLECIMIENTO

ARBORICULTURA y FLORICULTURA

Director propietario  
DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA  
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio  
de la provincia de Lérida,  
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España  
VIDES AMERICANAS  
De producto directo y para porta ingerto,  
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.  
Se enviará el catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida.  
Representante en esta provincia D. Roberto Justo Novoa, Colón, 20, principal.

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

Orense.—Progreso, 36

MAQUINAS PARA COSER

Las seis grandes fábricas que tiene establecidas en América y Europa la Compañia Fabril SINGER y que en once millones de máquinas revela bien las claras la marcada predileccion que el público de ambos continentes demuestra por las máquinas SINGER.

Entre los hermosísimos modelos que dieron justa fama á esta fabricacion desceñla la nueva Lanzadera vibrante. Desprovista de engranes y de fácil manejo, es la más ligera, la que menor ruido hace, la de más sencillo mecanismo y con la que pueden ejecutarse primorosas labores.

A pesetas 2/50 por semana

Grandes descuentos al contado.  
Comisionados para la venta y cobros en los principales pueblos de la provincia

CARRETES DE HILO

Torsales de seda.—Agujas, aceites

Piezas sueltas y accesorios para toda clase de costura.

Pidanse catálogos ilustrados que se dan gratis.

IMPORTANTE

La nueva camiseria madrileña establecida en Orense, calle de la Paz, número 28, participa á su numerosa clientela que tiene un gran surtido en toda clase de camisas á precios reducidísimos para que puedan todos aprovecharse de su buen corte y esmerada confeccion de esta camiseria.

Tenemos para el invierno camisas de franela baratasísimas, siendo su precio desde 4 pesetas en adelante hasta las de gran lujo.

Estas no son de fabrica, se construyen en esta camiseria y son de toda confianza.

Se hacen de encargo y á la medida. No equivocarse

Calle de la Paz, núm. 28, Orense 22—30

ABONARES DE CUBA

Los compra D. Demetrio Rodriguez ORENSE.—SAN FERNANDO, 21.

VENTA

Se vende la casa núm. 32 de la calle de Hernan Cortés, compuesta de dos pisos, entresuelo y bajo, con vistas y dos balcones á su trasera.

Informar de la documentacion y precio D. Evaristo Fernandez Villarino, San Francisco, núm. 26.

Imprenta LA POPULAR

cipales del Ayuntamiento de Rodiezno no era trámite previo indispensable para poder apreciar si se habia cometido ó no el delito de falsedad en documento oficial, y de aquí el que no existiendo cuestion previa alguna para resolver para la prosecucion de la causa, era indudable que no se estaba en el caso de excepcion del art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887. Se citaba por la Audiencia los artículos 2.º y 321 de la ley orgánica del Poder judicial, 4.º de la adicional á la misma, 10 de la de Enjuiciamiento criminal, 314 del Código penal y los 3.º, 16 y 19 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Que el Gobernador, de acuerdo con el informe de la Comision provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 314 del Código penal, que dice: «Será castigado con las penas de cadena temporal y multa de 500 á 5.000 pesetas, el funcionario público que abusando de su oficio cometiere falsedad; primero, contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica»:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, según el cual: «Los Gobernadores no podrán suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo, que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo de la denuncia formulada por don Juan Gutierrez y D. José Rodriguez, dando con ello lugar al sumario inscrito por el Juzgado de La Vecilla.

2.º Que los hechos en la denuncia consignados pudieran ser constitutivos de uno ó varios delitos de falsedad de los que define y castiga el Código penal vigente.

3.º Que, en tal concepto, sólo á la jurisdiccion ordinaria compete el conocimiento de los mismos, toda vez que tratándose de definir la existencia del delito de falsedad, no cabe cuestion ninguna previa que haya de resolverse por la Administracion, tanto más cuanto que en el presente caso el propio Gobernador reconoció implícitamente la competencia de la Autoridad judicial, al remitir, como desde luego se remitió al Juzgado, la denuncia que ante su Autoridad formularon los querellantes:

3.º Que no se está, por tanto, en ninguno de los dos casos de excepcion que establece el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, anteriormente citado, para que puedan los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á veintidos de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 360.)